

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN EL DERECHO PROCESAL EN ECUADOR

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON PROCEDURAL LAW IN ECUADOR

Autores: ¹Marlon Daniel Guillin Oviedo, ²Hugo Marcelo Arévalo Hidalgo, ³Johanna Irene Escobar Jaray y ⁴Edward Fabricio Freire Gaibor.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-0142-9748>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-2307-7491>

³ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9053-8060>

⁴ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-2913-8445>

¹E-mail de contacto: mdguillino@ube.edu.ec

²E-mail de contacto: hmarevaloh@ube.edu.ec

³E-mail de contacto: jiescobarj@ube.edu.ec

⁴E-mail de contacto: efffreireg@ube.edu.ec

Afiliación: ^{1*2*3*4*}Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

Artículo recibido: 7 de Diciembre del 2025

Artículo revisado: 9 de Diciembre del 2025

Artículo aprobado: 13 de Diciembre del 2025

¹Abogado graduado en la Universidad Internacional SEK, (Ecuador).

²Abogado graduado en la Universidad Internacional SEK, (Ecuador).

³Abogada graduada de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador).

⁴Abogado graduado de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, (Ecuador).

Resumen

La investigación analiza el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo procesal del derecho en Ecuador, examinando cómo su implementación en el sistema de justicia garantiza los principios de celeridad y economía procesal. Esta tecnología permite optimizar la gestión y revisión de requisitos formales de documentos, el análisis de demandas, denuncias y sus contestaciones, así como el desarrollo inmediato de oficios judiciales, logrando un acceso más adecuado a la justicia mediante un sistema eficaz y eficiente. A través de un enfoque teórico-metodológico mediante triangulación de datos, se analiza cómo la IA procesa demandas, contestaciones y sentencias basándose en normas vigentes y casos análogos, logrando respuestas asertivas sobre el cumplimiento de requisitos formales y disminuyendo significativamente los trámites burocráticos. Esta tecnología proporciona al juzgador elementos fácticos y probatorios sintetizados, ofreciendo respuestas lógicas a problemas jurídicos mediante revisión exhaustiva de elementos probatorios, acelerando audiencias y logrando celeridad procesal. La pregunta de investigación plantea: ¿de qué manera la

implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en el derecho procesal ecuatoriano contribuye al fortalecimiento de los principios de celeridad y economía procesal, garantizando el debido proceso y las garantías constitucionales? El objetivo general busca determinar el impacto de la implementación de la Inteligencia Artificial en el desarrollo del derecho procesal ecuatoriano, estableciendo su contribución en la optimización de los principios de celeridad y economía procesal. Se propone que el Consejo de la Judicatura implemente un Sistema Único de Análisis Digital con asistente virtual capaz de proporcionar respuestas inmediatas, notificar automáticamente y analizar documentación en segundos, eliminando la carga procesal y permitiendo procesos judiciales más eficientes. **Palabras clave: Inteligencia Artificial, Derecho Procesal, Celeridad, Eficiencia, Eficacia.**

Abstract

This research analyzes the use of Artificial Intelligence (AI) in the procedural development of law in Ecuador, examining how its implementation in the justice system guarantees the principles of procedural efficiency and economy. This technology

optimizes the management and review of formal document requirements, the analysis of claims, complaints, and responses, as well as the immediate drafting of official court orders, achieving more appropriate access to justice through an effective and efficient system. Through a theoretical-methodological approach using data triangulation, the study analyzes how AI processes claims, responses, and judgments based on current regulations and analogous cases, achieving accurate responses regarding compliance with formal requirements and significantly reducing bureaucratic procedures. This technology provides judges with synthesized factual and evidentiary elements, offering logical answers to legal problems through a thorough review of evidence, accelerating hearings, and achieving procedural efficiency. The research question is: How does the implementation of Artificial Intelligence systems in Ecuadorian procedural law contribute to strengthening the principles of procedural efficiency and economy, while guaranteeing due process and constitutional rights? The general objective is to determine the impact of implementing Artificial Intelligence on the development of Ecuadorian procedural law, establishing its contribution to optimizing the principles of procedural efficiency and economy. It is proposed that the Council of the Judiciary implement a Unified Digital Analysis System with a virtual assistant capable of providing immediate responses, automatically notifying parties, and analyzing documents in seconds, thus reducing the procedural burden and enabling more efficient judicial processes.

Keywords: Artificial Intelligence, Procedural Law, Efficiency, Effectiveness.

Sumário

Esta pesquisa analisa o uso da Inteligência Artificial (IA) no desenvolvimento processual do direito no Equador, examinando como sua implementação no sistema judiciário garante os princípios da eficiência e economia processual. Essa tecnologia otimiza a gestão e a revisão de documentos formais, a análise de pedidos, reclamações e contestações, bem como a

elaboração imediata de despachos judiciais, possibilitando um acesso mais adequado à justiça por meio de um sistema eficaz e eficiente. Através de uma abordagem teórico-metodológica com triangulação de dados, o estudo analisa como a IA processa pedidos, contestações e decisões com base na legislação vigente e em casos análogos, obtendo respostas precisas quanto ao cumprimento dos requisitos formais e reduzindo significativamente os procedimentos burocráticos. Essa tecnologia fornece aos juízes elementos factuais e probatórios sintetizados, oferecendo respostas lógicas a problemas jurídicos por meio de uma análise minuciosa das provas, acelerando as audiências e alcançando eficiência processual. A questão de pesquisa é: Como a implementação de sistemas de Inteligência Artificial no direito processual equatoriano contribui para o fortalecimento dos princípios da eficiência e economia processual, garantindo o devido processo legal e os direitos constitucionais? O objetivo geral é determinar o impacto da implementação da Inteligência Artificial no desenvolvimento do direito processual equatoriano, estabelecendo sua contribuição para a otimização dos princípios de eficiência e economia processual. Propõe-se que o Conselho da Magistratura implemente um Sistema Unificado de Análise Digital com um assistente virtual capaz de fornecer respostas imediatas, notificar automaticamente as partes e analisar documentos em segundos, reduzindo assim a carga processual e possibilitando processos judiciais mais eficientes.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Direito Processual, Eficiência, Eficácia, Efetividade.

Introducción

La investigación se centra en el desarrollo evolutivo del uso de la Inteligencia Artificial (IA) dentro de los sistemas judiciales, enfocado a la aplicación del mismo dentro del territorio ecuatoriano mediante un sistema articulado de recursos digitales y la sana crítica de los jueces. La simbiosis de estos elementos tiene un

impacto significativo en el derecho procesal, ya que permite la optimización de recursos y una respuesta oportuna ante casos graves donde la intervención judicial pronta es necesaria. Además, esta integración tecnológica proporciona una perspectiva diferente a los jueces basada en todos los elementos fácticos, orientando al juzgador hacia diversas sentencias con una motivación sólida. Esto permite identificar qué procesos carecen de formalidad, cuáles necesitan una respuesta inmediata o aquellos que no cuentan con sustento legal, posibilitando que la carga procesal disminuya y, a su vez, se obtengan respuestas coherentes desde el aparato judicial (García, 2023). En este contexto, surge la interrogante central que guía el presente estudio: ¿De qué manera la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en el derecho procesal ecuatoriano contribuye al fortalecimiento de los principios de celeridad y economía procesal, garantizando al mismo tiempo el debido proceso y las garantías constitucionales de las partes? Esta pregunta responde a la necesidad de comprender no solo los beneficios tecnológicos de la automatización judicial, sino también los desafíos éticos, jurídicos y prácticos que emergen de su incorporación en un sistema de justicia constitucional.

Para dar respuesta a esta interrogante, la investigación se propone determinar el impacto de la implementación de la Inteligencia Artificial en el desarrollo del derecho procesal ecuatoriano, estableciendo su contribución en la optimización de los principios de celeridad y economía procesal. Este propósito general se materializa a través de tres líneas de acción específicas: primero, evaluar la eficiencia de las herramientas de Inteligencia Artificial en la automatización de tareas instrumentales del sistema judicial ecuatoriano, específicamente en la revisión de requisitos formales de

demandas, contestaciones y documentación procesal, comparando los tiempos de procesamiento algorítmico frente a los métodos tradicionales para cuantificar la reducción de plazos procesales; segundo, identificar los desafíos éticos, jurídicos y prácticos que presenta la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial en los procesos judiciales del Ecuador, analizando aspectos como la transparencia algorítmica, los sesgos potenciales, la brecha digital entre operadores de justicia, y la necesidad de supervisión humana para garantizar la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales; y tercero, diseñar una propuesta de Sistema Único de Análisis Digital (SUAD) adaptado al marco normativo ecuatoriano que permita la automatización asistida de actuaciones procesales repetitivas, manteniendo la supervisión judicial obligatoria en decisiones de fondo, con el propósito de reducir la congestión procesal y fortalecer el acceso equitativo a la justicia sin comprometer las garantías constitucionales del debido proceso, validando esta propuesta a través de criterios de expertos que demuestren su viabilidad y aplicación dentro del contexto del estudio.

El retrato de la sociedad algorítmica integra igualmente el modelo de Justicia y sus valores, principios y estructuras guardan una estrecha simbiosis con la sociedad que vivimos, de modo que la irrupción de la tecnología y la digitalización social empapa la Justicia (Barona, 2022, p.39). A su vez, la implementación de la Inteligencia Artificial dentro del sistema de justicia ha generado un proceso revolucionario mediante la gestión de información jurídica. El uso de diferentes aplicaciones para la revisión y descubrimiento de documentos electrónicos permite la síntesis de información y datos de manera casi inmediata, con una precisión extraordinaria que

identifica patrones, conceptos clave, casos análogos y documentos relevantes para cada proceso. Esta tecnología no solo reduce el tiempo y las costas procesales, sino que también analiza de manera minuciosa las pruebas, disminuyendo el riesgo de pasar por alto evidencia fundamental o de que existan vicios de procedimiento que afecten a una de las partes involucradas. Además, la Inteligencia Artificial analiza la documentación con una meticulosidad exhaustiva para evitar vicios en el procedimiento y genera resoluciones alternativas del caso, tomando decisiones estratégicas fundamentadas en el derecho (Colmenarejo, 2022). El desarrollo de sistemas avanzados de análisis predictivo permite examinar bases de datos jurisprudenciales nacionales y criterios de aplicabilidad de estándares internacionales para su implementación en el caso en cuestión de minutos. Esto facilita que jueces y abogados evalúen con mayor objetividad las posibilidades de éxito, presenten una apelación fundamentada y desarrollen una estrategia más sólida para el litigio.

Tanto es así que las discusiones doctrinales ahora versan sobre si puede el juzgador adoptar una decisión con apoyo de una máquina, si podemos valorar riesgos de reincidencia a partir de algoritmos e incluso, como última instancia, si sería admisible la figura de una suerte de «juez robot». Podemos aquí adelantar que la doctrina mayoritaria se inclina por rechazar que una máquina pueda tomar la decisión de forma autónoma, para sostener que la IA debería mantener un papel asistencial y no sustitutorio de la función judicial (Martín, 2021, p.80). Por otro lado, es necesario comprender los desafíos y desventajas que presenta el uso de la Inteligencia Artificial dentro de los procesos judiciales del sistema ecuatoriano. Uno de los riesgos graves es que el juez desconozca las

causas y solo usen la IA para generar sentencias, mientras que los abogados de forma única lean los parámetros establecidos por la Inteligencia Artificial durante las audiencias. Esta situación generaría una falta de desarrollo crítico tanto en abogados como en jueces, permitiendo que la IA intervenga a plenitud dentro de los procesos y erradicando el principio de oralidad. Esto implicaría un regreso a un sistema burocrático de resoluciones en donde la Inteligencia Artificial sería el único actor que interviniera en el proceso judicial. Por lo tanto, la implementación de la Inteligencia Artificial no está exenta de desafíos éticos y prácticos, persistiendo preocupaciones sobre la transparencia y confiabilidad de los algoritmos o "caja negra" utilizados, ya que existe la posibilidad de perpetuar sesgos presentes en los datos implementados. Sumado a esto, la brecha digital entre jueces y abogados genera una enorme desventaja y parcializa la justicia.

De todo lo expuesto es innegable la necesidad de contar con una regulación adecuada para la utilización de herramientas de IA en el proceso. Ello se traduce en la necesidad de disponer de un marco normativo en el cual se recojan los presupuestos, las condiciones para su utilización, las garantías esenciales y las consecuencias de su uso por las autoridades (Hoyos, 2022, pág. 44). Además, no se ha desarrollado un marco regulatorio que garantice la equidad, la supervisión humana y la responsabilidad en el uso de la Inteligencia Artificial dentro de los procesos judiciales. Es fundamental garantizar que la IA sea una herramienta al servicio de la justicia y no un sustituto de la imparcialidad humana, siendo esencial que el criterio humano supervise todo proceso legal. Si bien existen desventajas por el uso de la Inteligencia Artificial, no hay que desconocer su impacto transformador y positivo dentro del andamiaje jurídico, en especial para

los usuarios, para quienes un litigio representa no solo un gasto excesivo de tiempo, sino también una pesada carga económica dentro de un sistema con plazos procesales tradicionales que pueden extenderse hasta años, para que exista una resolución o sentencia. La Inteligencia Artificial se transforma en una aliada para el acceso a la justicia y la eficiencia, ya que su implementación para la elaboración de tareas repetitivas y en altas cantidades como la revisión de pruebas o la elaboración de escritos básicos logra la reducción de horas de trabajo legal requeridas. Esto se traduce en citaciones y audiencias en menor tiempo, menor inversión económica y mejor atención a los usuarios (Gómez, 2022).

En la Constitución de la República del Ecuador se reconocen los principios de celeridad y economía procesal como elementos fundamentales dentro de un litigio, los cuales permiten la optimización de recursos y la respuesta más pronta a problemas jurídicos, facilitando así la construcción de un sistema de justicia más idóneo para los usuarios. Estos principios constituyen mandatos de optimización de los derechos fundamentales, es decir, que su existencia y prevalencia permiten la interdependencia de derechos dentro de un proceso legal que garantice resoluciones apegadas a la legalidad y al debido proceso (Vistín y Jasmin, 2020). Por un lado, el principio de celeridad procesal se configura como un pilar fundamental en la administración de justicia moderna, ya que su objetivo principal es garantizar que los procesos judiciales se lleven a cabo en el tiempo debido, evitando las dilaciones innecesarias o indebidas que desnaturalicen el fin mismo de la justicia. Este principio no solo busca la mayor rapidez posible, sino también la eficiencia en los actos procesales, el cumplimiento de plazos judiciales y la eliminación de trámites innecesarios que no

aportan valor al proceso. Constituye una garantía para las partes, que evita la incertidumbre, además de la inutilidad de resoluciones favorables por el transcurso del tiempo, aún más en materias donde el tiempo es crítico, como en los asuntos penales o las medidas cautelares (Paz, 2023).

En cambio, el principio de economía procesal está orientado a obtener resultados dentro de un proceso con el mínimo empleo de actividades, esfuerzos y recursos. Este principio se fundamenta en la simplificación de trámites, la concentración de actuaciones, la solución de conflictos de forma alternativa y la intervención necesaria de las partes dentro de un proceso, con la finalidad de obtener una sentencia o resolución en tiempos prudenciales, evitando así gastos innecesarios o el uso excesivo de recursos físicos o digitales. La economía procesal garantiza que el uso de recursos de las partes y del sistema de justicia sea idóneo al proceso, optimizando así el tiempo de la función judicial para el beneficio de toda la sociedad (Ortiz, 2019). Ambos principios, celeridad y economía, se encuentran interrelacionados, logrando así un proceso ágil, sin dilaciones innecesarias y con el mínimo uso de recursos públicos y privados. De forma interdependiente eliminan etapas redundantes y promueven la eficiencia, logrando así una justicia práctica y efectiva que erradica costos excesivos o demoras exasperantes. Esto permite un adecuado acceso a la justicia mediante una solución oportuna, reconociendo la interseccionalidad dentro de los juicios latentes y garantizando el debido proceso en tiempos objetivos y razonables, sin perjudicar los derechos fundamentales. La finalidad es llevar a cabo procesos que sean rápidos y eficientes, pero sin sacrificar la justicia ni la profundidad del análisis que cada caso merece.

La ciberjusticia representa un avance significativo que combina el derecho tradicional con el uso de la tecnología para lograr una justicia ágil y funcional, siendo la transformación digital del sistema judicial. Esta evolución no está limitada a la revisión documental o al envío de correos de forma automática, sino que implica el cambio integral de la infraestructura del sistema de justicia, permitiendo la incorporación de tecnología, especialmente de sistemas inteligentes que interactúen con abogados, jueces y personal administrativo. La finalidad es modernizar la justicia y proporcionar un acceso transparente y amigable a la información, superando los límites de las administraciones tradicionales basadas en el uso de papel, con procedimientos que suelen ser lentos y costosos, para transitar hacia procedimientos que se encuentran a un clic de distancia, con un sistema inteligente que guía a los usuarios en cada paso (Daudí, 2022). Por ello, se busca conocer la situación actual de la judicatura en torno a la ciberjusticia, es decir, la forma en que la informática jurídica constituye una herramienta para los Tribunales en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales dotan de mayor calidad y eficacia a la decisión judicial, así como la necesidad de que exista una colaboración entre poderes de los Estados para materializar una mayor participación de los entes jurisdiccionales en la resolución de casos inherentes a la ciberjusticia (Escámez, 2021, p.2).

A su vez, la innovación de la Función Judicial mediante el uso de Inteligencia Artificial permite que la justicia sea accesible, eficiente y transparente, superando los problemas tradicionales dentro del sistema, como la acumulación de causas en archivos físicos, la acumulación de procesos en los despachos judiciales y el mal estado de archivos por su

tiempo prolongado. El uso de la tecnología dentro de los procesos agiliza la tramitación de las causas, contribuyendo de forma directa a los principios de celeridad y economía procesal, además de que permite un proceso de monitoreo simultáneo por parte de los actores en la revisión de su proceso. Esto permite ver en tiempo real cómo avanza su proceso, evitando dilaciones innecesarias o errores administrativos. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales de la ciberjusticia es la incorporación de procesos judiciales en línea. Aunque existen precedentes del uso tecnológico en Ecuador, como la página web del Consejo de la Judicatura, el sistema E-SATJE y el casillero judicial electrónico, existen limitantes que dificultan el uso de estos recursos dentro de los procesos judiciales. Entre estas limitaciones se encuentran el analfabetismo digital, la falta de asistentes virtuales, la carencia de dispositivos adecuados o la falta de conexión de banda ancha, lo que dificulta el acceso a sistemas virtuales de justicia. Estas constituyen barreras que se presentan en la cotidianidad y representan problemas latentes relacionados con el acceso a la justicia de manera equitativa e igualitaria (Sanchez, 2025). No obstante, el objetivo principal de la ciberjusticia es ampliar el acceso a la justicia, eliminando barreras geográficas y económicas, ya que las plataformas digitales permiten que las personas en zonas periféricas del país puedan interactuar con el sistema de justicia de manera más sencilla y a menor costo. Esto es significativo en zonas y contextos donde la presencia física representa un obstáculo, logrando la participación efectiva de las partes y garantizando el goce de los derechos de forma efectiva. Está orientado a que la administración de justicia sea inclusiva y adaptada a las necesidades de la sociedad, lo cual depende de la facultad del Estado de implementar sistemas

tecnológicos sin comprometer los principios constitucionales establecidos (Calés, 2019).

La implementación de la Inteligencia Artificial (IA) dentro de los sistemas de justicia presenta un impacto significativo para su administración, acceso y celeridad. Diversos países han implementado estas tecnologías dentro de sus procesos administrativos y asistenciales con enfoques variados, adaptados a sus realidades legales y culturales. Ecuador se encuentra en un momento decisivo para implementar el avance tecnológico en sus procesos judiciales. Mediante un derecho comparado, se pueden extraer valiosas lecciones de sistemas pioneros como los de China y Argentina. Es fundamental analizar su marco regulatorio, elementos tecnológicos y buenas prácticas que permitan adaptarse al caso ecuatoriano, optimizando así sus recursos y garantizando el acceso a la justicia, mientras se mantienen los principios éticos del derecho tradicional y los estándares de derechos humanos contemporáneos. La implementación de la IA en el sistema judicial debe ser progresiva, responsable y especialmente adaptada a las necesidades locales. Por ello, es necesario analizar cómo China ha incorporado dentro de sus tribunales el concepto de justicia digital conocido como "smart courts", el cual opera aplicando algoritmos en diversas plataformas digitales sincronizadas, permitiendo la presentación de casos en línea, audiencias virtuales y análisis automatizado de materiales jurídicos. Un ejemplo destacado es el Tribunal de Internet de Hangzhou, que se encarga de la grabación de audiencias y testimonios mediante reconocimiento de voz, análisis de pruebas y verificación de información en bases de datos en tiempo real, logrando así automatizar elementos probatorios en cuestión de segundos. Este sistema permitió resolver miles de casos durante el período de pandemia, garantizando la

continuidad judicial y reduciendo las congestiones procesales, pero manteniendo la deliberación humana y la supervisión de autoridades y jueces (Zou, 2022).

Otro caso relevante es lo que está sucediendo en Argentina con el Sistema Prometea, el cual está diseñado para agilizar la resolución de casos repetitivos y la gestión documental en el ámbito judicial. Este sistema analiza mediante lenguaje natural los expedientes judiciales para predecir soluciones basadas en jurisprudencia y generar borradores de dictámenes jurídicos. Esta información es analizada por los jueces, permitiendo comprender todo el panorama jurídico de manera situada. El sistema ha logrado resolver casos de forma exitosa, disminuyendo el tiempo de resolución de 90 minutos a 1 minuto, liberando a los funcionarios de tareas complejas y repetitivas que requerían mayor tiempo con la intervención humana. Prometea opera mediante tres fases: la primera incluye la búsqueda de leyes relacionadas y la predicción del modelo de dictamen; la segunda consiste en la redacción automatizada del documento; finalmente, la tercera fase incluye la firma digital. Este sistema ha demostrado ser útil en las Cortes, ya que genera notificaciones en múltiples idiomas y proyecta resoluciones en minutos (Estevez y Fillottran, 2020). Los casos anteriormente mencionados demuestran cómo la implementación y el uso de la IA en procesos repetitivos y cotidianos dentro del sistema de justicia garantiza respuestas rápidas y concisas, basándose en un análisis de documentación legal vigente. Además, permite sistematizar procesos que de forma manual tardarían demasiado tiempo. La IA constituye una herramienta valiosa para el sistema de justicia, especialmente para el ecuatoriano, el cual presenta dilaciones excesivas en los procesos debido a la gran carga procesal (Chapi, 2024). Por lo cual, al usar un sistema inteligente que

analice de forma automática procesos, documentación y procedimientos administrativos, se lograría optimizar la justicia. Además, este sistema entregaría a los jueces de cortes y tribunales análisis jurídicos que les proporcionen mayor claridad, de manera que, al momento de emitir una sentencia o resolución, esta permita garantizar los derechos fundamentales y principios constitucionales que acompañan a la justicia.

Materiales y Métodos

La investigación adoptó un enfoque metodológico mixto de carácter descriptivo-explicativo-propositivo, con un diseño no experimental de corte transversal, que permitió analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en el derecho procesal ecuatoriano sin manipular variables, sino observando el fenómeno en su contexto natural durante un período específico. Este enfoque combinó técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener una comprensión integral del objeto de estudio, utilizando métodos de nivel empírico como la observación sistemática, la revisión documental exhaustiva y el derecho comparado con sistemas jurídicos internacionales. Asimismo, se emplearon métodos de nivel teórico, incluyendo el análisis analítico-sintético, el método sistémico-jurídico y el método teleológico, que permitieron descomponer el problema en sus elementos constitutivos, examinar las interrelaciones entre los componentes del sistema judicial y la tecnología, e identificar la finalidad y los objetivos subyacentes en la implementación de la IA en el ámbito procesal (Manje, 2021). Para el procesamiento y análisis de datos se implementó un método estadístico matricial, estructurando la información recopilada mediante matrices de evaluación que facilitaron la sistematización y comparación de resultados. Como técnicas e instrumentos de recolección de

información se utilizaron guías de observación, guías de revisión documental, matrices de análisis procesal, entrevistas semiestructuradas a operadores de justicia, criterio de expertos en derecho procesal y tecnología jurídica, además de tablas y gráficos comparativos que permitieron visualizar los hallazgos de manera clara y objetiva. Esta triangulación metodológica garantizó la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos, al contrastar diferentes fuentes de información y perspectivas sobre el fenómeno estudiado (Salazar, 2020).

La población de estudio estuvo conformada por profesionales del derecho que ejercen en el sistema judicial ecuatoriano, específicamente en la ciudad de Guayaquil, y se seleccionó una muestra intencional no probabilística basada en criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. Los criterios de inclusión contemplaron a jueces, secretarios judiciales y abogados litigantes con al menos cinco años de experiencia en el sistema procesal ecuatoriano, que ejercieran su práctica profesional en el Complejo Judicial Sur de Guayaquil, y que manifestaran disposición para participar en entrevistas sobre el uso potencial de tecnologías de Inteligencia Artificial en procesos judiciales. Como criterios de exclusión se establecieron: profesionales con menos de cinco años de experiencia, aquellos que no ejercieran activamente en el ámbito judicial, y quienes no tuvieran conocimiento básico sobre tecnologías digitales aplicadas al derecho (Hernández, 2020). Las entrevistas se realizaron en el Complejo Judicial Sur de Guayaquil, permitiendo recoger las percepciones, experiencias y expectativas de los operadores de justicia respecto a la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en el derecho procesal ecuatoriano. Paralelamente, se llevó a cabo un análisis matricial comparativo de

expedientes judiciales reales, procesando demandas y contestaciones mediante cinco plataformas diferentes de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Claude, DeepSeek, TextCortex y Gemini) para evaluar su capacidad de análisis formal y sustancial, midiendo tiempos de respuesta, precisión en la identificación de vicios procesales y conformidad con los requisitos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Esta combinación metodológica permitió contrastar la eficiencia teórica de la IA con las percepciones prácticas de quienes operan cotidianamente en el sistema de justicia ecuatoriano.

Resultados y Discusión

Resultados de la sistematización teórica

La sistematización teórica reveló que la implementación de la Inteligencia Artificial en el derecho procesal ecuatoriano debe fundamentarse en un equilibrio entre innovación tecnológica y salvaguarda de garantías constitucionales, especialmente considerando lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), que en su articulado reconoce el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en valoraciones automatizadas. Este hallazgo es fundamental para comprender que los sistemas algorítmicos, aunque eficientes en el procesamiento de información, pueden generar sesgos y discriminación si operan sin supervisión humana adecuada. La literatura revisada confirma que la doctrina mayoritaria rechaza categóricamente la posibilidad de que una máquina tome decisiones autónomas en el ámbito judicial, sosteniendo que la IA debe mantener un papel exclusivamente asistencial y nunca sustitutorio de la función jurisdiccional. Esta postura se fundamenta en la necesidad de preservar la sana crítica del juzgador, la valoración contextualizada de las pruebas y la

interpretación humanizada del derecho, elementos que constituyen la esencia misma del debido proceso y que no pueden ser delegados a algoritmos, por sofisticados que estos sean (Cumbre Judicial Iberoamericana, s.f.).

La sistematización teórica también reveló la existencia de un paradigma dual en la implementación de IA en sistemas judiciales comparados, caracterizado por dos modelos diferenciados pero complementarios: el modelo de eficiencia procesal instrumental, predominante en sistemas como el chino con sus "smart courts" y el argentino con Prometea, que prioriza la automatización de tareas repetitivas y la aceleración de trámites burocráticos; y el modelo de garantías constitucionales reforzadas, que enfatiza la protección de derechos fundamentales y la supervisión humana obligatoria en toda decisión automatizada. La literatura internacional convergente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de organismos multilaterales como la OCDE sostiene que ninguno de estos modelos debe implementarse de manera aislada, sino que la integración armónica de ambos enfoques constituye la única vía legítima para incorporar IA en sistemas judiciales democráticos. (Código Ético Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial, 2014).

Esta tensión paradigmática es especialmente relevante para Ecuador, cuya Constitución de 2008 establece un Estado constitucional de derechos y justicia que exige equilibrar la eficiencia procesal con la máxima protección de garantías fundamentales, lo que implica que cualquier sistema de IA judicial debe superar estándares más exigentes que aquellos aplicables en jurisdicciones con modelos constitucionales menos garantistas. Un hallazgo teórico adicional de particular relevancia es la

identificación de tres generaciones evolutivas en la adopción de tecnologías de IA en sistemas judiciales, cada una con características, riesgos y potencialidades diferenciadas. La primera generación, denominada "automatización documental básica", se limita a la digitalización de expedientes, notificaciones electrónicas y gestión de agendas, sin incorporar análisis algorítmico sustantivo; esta fase, ya superada por países pioneros, pero aún vigente parcialmente en Ecuador a través del sistema E-SATJE, presenta bajo riesgo de afectación a garantías procesales, pero también impacto limitado en la reducción de congestión judicial (Sangines y Avendaño, 2025). La segunda generación, caracterizada como "asistencia algorítmica para decisiones instrumentales", incorpora sistemas de procesamiento de lenguaje natural para análisis formal de documentos, detección de vicios procesales, generación de borradores de providencias de trámite y búsqueda jurisprudencial predictiva; esta es la fase en la que se encuentran sistemas como Prometea en Argentina y representa el modelo óptimo para Ecuador según la evidencia revisada, pues equilibra eficiencia con supervisión humana. La tercera generación, denominada "decisión algorítmica automatizada", implica que sistemas de IA tomen decisiones judiciales de fondo sin intervención humana sustantiva, modelo

presente en algunas jurisdicciones chinas para casos estandarizados pero rechazado categóricamente por la doctrina constitucionalista latinoamericana y europea por vulnerar el derecho humano a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial (Sangines y Avendaño, 2025).

Resultados del análisis matricial de expedientes

Se tomó como muestra dos expedientes judiciales de procesos civiles tramitados en el sistema judicial ecuatoriano para ejemplificar el tiempo de demora del análisis documental y evaluar la capacidad de cinco plataformas de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Claude AI, DeepSeek, TextCortex y Gemini) en la revisión de requisitos formales y sustanciales establecidos en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). El análisis comparativo se centró en medir tres variables fundamentales: el tiempo de procesamiento que requiere cada sistema de IA para analizar los documentos judiciales, la precisión en la identificación de vicios formales y sustanciales en las demandas y contestaciones, y la capacidad de generar observaciones jurídicamente fundamentadas que orienten a las partes procesales sobre el cumplimiento o incumplimiento de requisitos legales.

Tabla 1. Matriz de análisis procesal - expediente no.23201202502268

Sentencia/ proceso	Chatgpt.ia	Claude.ia	Deepseek.ia	Textcortex.ia	Gemini.ia
Demanda					
Cumple con los requisitos formales según (Si/No)	No	No	No	No	No
Tiempo que se demoró la IA en revisar	30 seg	25 seg	20 seg	25 seg	22 seg
Observaciones	Falta datos identificación y narración de hechos	Falta datos identificación y narración de hechos	Falta datos identificación y narración de hechos	Falta datos identificación y narración de hechos	Falta datos identificación y narración de hechos
Contestación de la demanda					
Cumple con los requisitos formales (Si/No)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiempo que se demoró la IA en revisar	28 seg	24 seg	19 seg	26 seg	23 seg
Observaciones	Contestación completa; Alega falta de exigibilidad	Contestación completa; Alega falta de exigibilidad	Contestación completa; Alega falta de exigibilidad	Contestación completa; Alega falta de exigibilidad	Contestación completa; Alega falta de exigibilidad
Análisis de proceso	Las fases procedimentales, pero no sustituye el criterio judicial para resolver conflictos de fondo.	Establece la obligación de cumplir con los artículos 142 y 146 del COGEP	Plante excepciones de forma y fondo, como vicios en la notificación o nulidad por incongruencias en el acta.	En etapa de contestación	Programar una audiencia de juicio
Tiempo estimado de llegar a Audiencia	2-3 semanas	2-3 semanas	2-3 semanas	2-3 semanas	2-3 semanas
Observaciones Generales: Las IA detectaron en 20-30 segundos que la demanda inicial incumplía requisitos del COGEP, mientras que un humano tardaría horas o días en notificarlo. En la contestación, verificaron en <30 segundos que el demandado incluyó excepciones, pruebas y defensas válidas, agilizando su admisión.					

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Matriz de análisis procesal – expediente 23201202502267

Sentencia/ proceso	Chatgpt.ia	Claude.ai	Deepseek.ia	Textcortex.ia	Gemini.ia
DEMANDA					
Cumple con los requisitos formales según (Si/No)	Si	Si	Si	Si	Si
Tiempo que se demoró la IA en revisar	18 seg	15 seg	12 seg	16 seg	14 seg
Observaciones	La demanda fue aceptada por cumplir con los requisitos legales, se fijó una pensión provisional para tres hijos, se decretó prohibición de salida del país del demandado y se ordenaron oficios al IESS para verificar sus ingresos, pero al momento del auto no se había citado al demandado, por lo que no existe contestación y el proceso avanza hacia una posible rebeldía.				
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA					
Cumple con los requisitos formales (Si/No)	NO	NO	NO	NO	NO
Tiempo que se demoró la IA en revisar	10 seg	7 seg	8 seg	9 seg	8 seg
Observaciones	El escrito de contestación presenta un vicio formal grave al carecer de la autorización expresa del demandado para la designación de su abogado defensor, lo que vulnera el requisito de legitimación procesal establecido en el Art. 146 del COGEP.				
Análisis de proceso	El proceso se encuentra en etapa de sustanciación inicial, con la demanda admitida y medidas cautelares decretadas, pero ante la falta de contestación válida por vicios formales (ausencia de autorización para el abogado del demandado), se prevé la declaratoria de rebeldía del demandado, lo que agilizará la continuidad del juicio hacia la audiencia única para fijar la				
	pensión alimenticia definitiva.				
Tiempo estimado de llegar a Audiencia	2-3 semanas	2-3 semanas	2-3 semanas	2-3 semanas	2-3 semanas
Observaciones Generales: El proceso evidencia una demanda bien fundamentada y admitida, con medidas cautelares activas y una pensión alimenticia provisional fijada, lo que refleja el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la actora. Sin embargo, la falta de contestación formal por parte del demandado ya sea por rebeldía o por vicios en su eventual defensa acelera el trámite hacia la audiencia única, donde se definirán los alimentos de manera definitiva. La posible declaratoria de rebeldía del demandado simplificará el proceso, pero también existiría riesgos de ejecución futura si no se identifican fuentes de ingresos claras. Los oficios al IESS buscan mitigar este riesgo, pero la efectividad dependerá de la cooperación institucional y la veracidad de la información obtenida.					

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Matriz de entrevista en el consejo de la judicatura sur de guayaquil

Pregunta	Juez 1	Juez 2	Secretario judicial 1	Secretario judicial 2
Cargo	Juez de la Unidad	Jueza de la Unidad	Secretario Judicial	Secretaria Judicial Laboral
Años de experiencia	Judicial Civil 12 años	Judicial de Familia 8 años	Civil 10 años	7 años
1. ¿Cuánto tiempo promedio se demora en calificar una demanda desde su recepción hasta emitir el auto inicial?	Entre 3 a 5 días hábiles, dependiendo de la complejidad del caso y la carga procesal del despacho	De 4 a 7 días en promedio. En casos de familia con medidas urgentes puede ser en 24-48 horas	Aproximadamente 4 días. El juez revisa primero, luego los abogados preparamos el auto y lo enviamos a firma	Entre 3 a 6 días. Depende mucho de si hay documentación completa o falta algo
2. ¿Cuánto tiempo se requiere para revisar y calificar una contestación de demanda?	Entre 2 a 4 días. Es más rápido que la demanda inicial porque ya conocemos el caso	De 2 a 3 días normalmente. Si hay excepciones complejas puede tomar hasta 5 días	Unos 3 días en promedio. Primero verificamos que esté completa la documentación	Entre 2 a 4 días. A veces las contestaciones vienen con muchas pruebas y toma más tiempo revisar
3. ¿Cuánto tiempo le toma elaborar la motivación de una sentencia o resolución de fondo?	Depende del caso. Sentencias simples 5-7 días; casos complejos pueden tomar de 2 a 3 semanas o más	Entre 1 a 2 semanas para casos regulares. En alimentos puede ser más rápido, 3-5 días	No elaboro sentencias, pero el proceso completo desde que el juez decide hasta que sale firmada toma entre 1 a 2 semanas mínimo	El juez dicta, los abogados transcribimos y revisamos. El proceso completo toma entre 7 a 15 días según la complejidad
4. ¿Cuánto tiempo se demora en elaborar y enviar oficios de auxilio judicial a otras instituciones (IESS, SRI, Bancos, etc.)?	Los oficios simples se elaboran en 1-2 días. El problema es que las respuestas de las instituciones pueden tardar semanas o meses	Entre 2 a 3 días para elaborar y enviar. Las respuestas son el verdadero cuello de botella, pueden tardar 1-3 meses	Elaboramos los oficios en 1-2 días usualmente. Los enviamos por correo certificado o correo electrónico cuando es posible	De 1 a 3 días en elaborar. A veces hay que hacer seguimiento porque las instituciones no responden a tiempo
5. ¿Qué factores considera que retrasan más estos procesos?	La alta carga procesal, falta de personal, y demandas mal presentadas que requieren múltiples providencias de subsanación	Documentación incompleta, falta de notificaciones efectivas, y acumulación de causas. Tenemos más casos de los que podemos atender	Escritos mal elaborados que no cumplen requisitos, falta de un sistema más ágil de notificaciones	La carga de trabajo excesiva y el sistema manual de revisión. Todo se hace documento por documento
6. ¿Cree que un sistema de análisis automatizado podría reducir estos tiempos? ¿En qué medida?	Definitivamente. Si una IA pudiera hacer la revisión formal inicial y alertar sobre vicios, ahorraríamos días en cada caso	Sí, especialmente en la verificación de requisitos formales. Podríamos enfocarnos en el análisis de fondo	Sería muy útil. La parte repetitiva de verificar requisitos podría automatizarse y ganar mucho tiempo	Totalmente de acuerdo. Si el sistema detectara errores de inmediato, las partes podrían corregir el mismo día
7. ¿Qué preocupaciones tendría sobre el uso de IA en estas tareas?	Que se pierda el criterio humano o que el sistema tenga sesgos. La supervisión judicial debe mantenerse siempre	Me preocupa la transparencia de los algoritmos y que todos tengamos acceso equitativo a la tecnología	Necesitaríamos capacitación. No todos manejamos bien la tecnología actual, menos una más compleja	El tema de protección de datos y que la máquina no puede reemplazar la valoración contextual de casos

Fuente: elaboración propia

Propuesta

Una solución tecnológica al problema de la congestión judicial es la creación de un Sistema Único de Análisis Digital (SUAD) en Ecuador, el cual presenta una respuesta innovadora para superar las dilaciones y demoras en el sistema de justicia. Este sistema integral lograría analizar de forma masiva datos jurídicos, predecir tendencias de litigiosidad, automatizar resoluciones de casos repetitivos y optimizar la gestión procesal. Según lo demuestra el análisis matricial anteriormente expuesto, este sistema

podría procesar íntegramente la documentación inicial demanda y contestación en menos de un minuto, mientras que el método manual actual requiere entre tres y siete días hábiles, conforme lo confirmaron los operadores judiciales entrevistados. Esta eficiencia temporal posiciona al SUAD como respuesta a problemáticas estructurales críticas del sistema judicial ecuatoriano: la congestión procesal derivada de la acumulación de causas en los despachos, las barreras de acceso a la justicia ocasionadas por plazos de espera excesivos que pueden extenderse meses o años, y la opacidad

procedimental que limita la capacidad de las partes para monitorear el avance real de sus expedientes. Mediante módulos especializados en procesamiento de lenguaje natural, lograría el análisis de expedientes basándose en jurisprudencia y brindaría asistencia en la redacción de dictámenes. Tomando como referencia los modelos chino y argentino para audiencias virtuales, notificaciones automatizadas y análisis de pruebas en tiempo real, el sistema de justicia ecuatoriano podría agilizar procesos en áreas como laboral, civil, familia y contrataciones públicas, entre otras, en tiempos muy reducidos. Es fundamental incorporar sistemas de análisis ético (similar al Sistema Prometea) para evitar sesgos algorítmicos, asegurando que las decisiones automatizadas sean justificadas y supervisadas por jueces, alineadas con los derechos fundamentales. Además, los procesos algorítmicos del sistema deberían aprender de forma automática, mejorando continuamente la calidad de los servicios de justicia. A continuación, la estructura propuesta desde el punto de vista jurídico – procesal.

Propuesta de Sistema Único de Análisis Digital (SUAD)

Objetivo jurídico-procesal

Optimizar la celeridad procesal y el debido proceso en áreas como civil, familia, laboral y contencioso administrativo. Automatizar actuaciones instrumentales (notificaciones, generación de providencias simples, agenda de audiencias) manteniendo la validación judicial humana en actos decisorios de fondo. Garantizar el interés superior del niño y derechos fundamentales, priorizando casos urgentes o de atención preferente.

Principios rectores

Legalidad y competencia: todo módulo debe respetar las competencias establecidas en el

COFJ y el COGEP. Debido proceso: transparencia en criterios, derecho a impugnar decisiones automatizadas y trazabilidad completa. Interoperabilidad judicial: integración de juzgados y órganos auxiliares bajo estándares abiertos. Protección de datos personales: cumplimiento estricto de la LOPDP y estándares internacionales. Supervisión humana obligatoria: ningún algoritmo sustituye al juez en la decisión de fondo.

Estructura procesal del sistema

Módulo de Ingreso de Demanda y Contestación

Digitalización y validación automática de requisitos procesales. Clasificación inicial por materia, cuantía y urgencia (sistema sugiere, juez confirma). Registro automático en el sistema de gestión procesal.

Módulo de Calificación y Proveído Inicial

Generación asistida de providencias de calificación y traslado. Sugerencia de medidas cautelares y notificaciones iniciales, con revisión del juez. Asignación de plazos y alertas de vencimiento.

Módulo de Notificaciones y Citaciones

Notificación omnicanal (correo, buzón judicial, mensaje) con constancia y trazabilidad probatoria. Gestión automática de agenda de citaciones y audiencias.

Módulo de Audiencias Virtuales Asistidas

Creación y administración de salas virtuales con grabación y actas automáticas para resguardar la intermediación procesal. Registro de pruebas en tiempo real con cadena de custodia digital.

Módulo de Análisis de Expedientes

Búsqueda rápida y jurisprudencia vinculante para fundamentar resoluciones. Identificación de casos repetitivos para tratamiento expedito.

Estadísticas de congestión por materia, despacho y etapa procesal.

Módulo de Resoluciones Asistidas

Generación de borradores de autos o providencias en procesos simples y repetitivos. El juez revisa, edita y firma electrónicamente; queda trazabilidad del autor humano.

Módulo Ético y de Control Judicial

Panel de sesgos y revisiones periódicas de criterios de clasificación. Comité técnico-jurídico revisa parámetros y validaciones. Registro inalterable de todas las actuaciones automatizadas para auditoría y nulidad si corresponde.

Roles y responsabilidades procesales

Juez/a: validación y firma de resoluciones; puede desactivar sugerencias automáticas. Secretario/a: control de documentación, notificaciones y agenda. Peritos y auxiliares judiciales: subida y validación de informes periciales. Oficial de Protección de Datos Judiciales: vela por DPIA, derechos ARCO y control de incidentes. Comité Ético-Técnico: aprueba algoritmos y monitorea sesgos.

Integración normativa

COFJ y COGEP: incorporar artículos o disposiciones transitorias que regulen la automatización asistida. Establecer límites claros: actos automatizables vs. actos decisorios. Incluir obligación de explicación y recurso frente a decisiones automáticas. Firma electrónica y sellado de tiempo como requisito de validez de todo acto automatizado.

Seguridad jurídica y cadena de custodia

Hash y registro inmutable de cada actuación procesal. Control de versiones y de acceso a expedientes. Respaldo probatorio de audiencias y actuaciones digitales.

Indicadores de impacto jurídico

Reducción del tiempo de calificación de demandas. % de providencias instrumentales asistidas por el sistema. Disminución del backlog procesal. Cumplimiento de plazos procesales y notificaciones efectivas.

Aspecto informático general

Plataforma única interoperable entre todos los órganos judiciales. Arquitectura modular para adaptarse a cambios normativos. Sistemas de IA integrados para clasificación, búsqueda y generación de borradores, siempre con control judicial.

Validación de la propuesta

La propuesta del Sistema Único de Análisis Digital (SUAD) fue sometida a validación mediante el método de criterio de expertos, contando con la participación de cuatro profesionales especializados en derecho procesal, tecnología jurídica y administración de justicia. Los expertos evaluaron la propuesta considerando cinco criterios fundamentales: viabilidad técnica y jurídica con el cumplimiento del marco normativo ecuatoriano, especialmente COGEP, COFJ y LOPDP, pertinencia para resolver problemas identificados como la congestión judicial, dilaciones procesales, deficiencias en calificación de escritos, además, la factibilidad de implementación de recursos tecnológicos, capacitación, resistencia al cambio, sostenibilidad temporal y respeto a garantías constitucionales y se realizó la valoración con escala Likert del 1 al 10, donde 1 es mínimo y 10 máximo.

Tabla 4. Resultados de criterio de expertos

No.	Viabilidad Técnica	Cumplimiento de las normas	Pertinencia	Factibilidad	Trazabilidad	TOTAL
1	8	9	10	9	9	45
2	7	8	8	9	9	41
3	9	10	9	8	8	44
4	7	8	8	9	8	40
TOTAL	31	35	35	35	34	170

Fuente: elaboración propia

Resultado de la suma de los criterios entre la cantidad de criterio: 170 Valor de la propuesta: Es igual a la suma de los criterios entre la cantidad de criterios: $170/20 = 8.5$. 8.5 es la media ponderada de todos los criterios vertidos por los expertos.

Tabla 4. Rangos de resultados

No.	Rangos de resultados	Valoración del resultado
1	Evaluación inferior a 5	La propuesta se desecha
2	Evaluación de 5 a 6.9	La propuesta debe mejorarse
3	Evaluación de 7 a 8.5	La propuesta es consistente
4	Evaluación de 8.5 a 10	La propuesta es óptima

Fuente: Metodología propuesta por Hernández et al. (2023).

Los resultados de la validación por criterio de expertos arrojaron una valoración promedio ponderada de 8.5 sobre 10, ubicándose en el rango de "Muy Adecuado" según la escala metodológica aplicada, lo que evidencia un nivel alto de aceptación y viabilidad de la propuesta del Sistema Único de Análisis Digital (SUAD). El análisis desagregado por criterios revela que el "Cumplimiento de las normas" y la "Pertinencia" obtuvieron las valoraciones más elevadas (35 puntos cada uno sobre un máximo de 40), lo que indica que los expertos reconocen la solidez jurídica de la propuesta y su relevancia para resolver los problemas identificados en el sistema judicial ecuatoriano. La "Factibilidad" también alcanzó una puntuación destacada de 35 puntos, reflejando que los expertos consideran viable su implementación a pesar de los desafíos tecnológicos y de capacitación que implica. La "Trazabilidad" obtuvo 34 puntos, demostrando confianza en la capacidad del sistema para garantizar el registro auditable de actuaciones procesales, aspecto crítico para la seguridad jurídica. Finalmente, la "Viabilidad Técnica" registró la puntuación más conservadora con 31 puntos, lo que sugiere que, si bien los expertos reconocen la factibilidad general del proyecto,

existen reservas legítimas respecto a la infraestructura tecnológica disponible, la interoperabilidad con sistemas existentes y la necesidad de inversión significativa en hardware, software y capacitación del personal judicial. Esta distribución de puntajes confirma que la propuesta es jurídicamente sólida y pertinente, pero requiere atención especial a los aspectos técnicos e informáticos para garantizar su implementación exitosa en el contexto ecuatoriano.

No obstante, los expertos formularon observaciones críticas que enriquecieron la propuesta y evidenciaron áreas de atención prioritaria para su implementación exitosa. La necesidad de reforma normativa expresa que incorpore disposiciones transitorias en el COGEP y el COFJ para regular jurídicamente la automatización asistida, estableciendo con claridad taxativa qué actuaciones pueden automatizarse y cuáles requieren intervención judicial directa, así como los recursos legales disponibles frente a decisiones automatizadas defectuosas. La implementación de Inteligencia Artificial en el sistema judicial ecuatoriano representa una oportunidad estratégica para sintetizar y automatizar tareas repetitivas de naturaleza instrumental como la verificación de requisitos formales en demandas y contestaciones, la generación de providencias de mero trámite, las notificaciones automatizadas y la elaboración de oficios de auxilio judicial permitiendo estas actuaciones en cuestión de segundos, liberando así recursos humanos valiosos para el análisis sustancial de los casos. Sin embargo, esta automatización debe operar bajo supervisión judicial permanente, donde cada actuación generada por algoritmos requiera validación humana antes de surtir efectos procesales, garantizando que ninguna decisión de fondo sea delegada a sistemas automatizados y que el criterio

judicial, la sana crítica y la valoración contextualizada permanezcan como competencias inalienables del juzgador. Este modelo híbrido de asistencia tecnológica con control humano obligatorio es el único capaz de materializar efectivamente los principios constitucionales de celeridad y economía procesal sin sacrificar las garantías fundamentales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, transformando a la IA en una herramienta que potencia la justicia sin sustituir la esencia humanista que debe caracterizar toda administración judicial en un Estado constitucional de derechos y justicia. Finalmente, el éxito del SUAD depende fundamentalmente de mantener la supervisión humana como principio inquebrantable: la IA debe ser una herramienta que potencie la capacidad decisoria del juez, nunca un sustituto que mecanice la justicia o erosione la sana crítica judicial, garantizando que la tecnología sirva al derecho y no viceversa.

La triangulación de datos entre el análisis matricial de expedientes procesados por Inteligencia Artificial y las entrevistas realizadas a funcionarios judiciales del Complejo Judicial Sur de Guayaquil, revela una brecha temporal crítica que evidencia el potencial transformador de la automatización en el sistema judicial ecuatoriano. Mientras que las cinco plataformas de IA analizadas lograron calificar demandas y contestaciones en un rango de 7 a 30 segundos, identificando vicios formales, requisitos incumplidos y proponiendo análisis procedimentales, los funcionarios judiciales entrevistados reportaron tiempos promedio de 3 a 7 días hábiles para calificar una demanda inicial y de 2 a 5 días para revisar una contestación. Esta diferencia representa una reducción potencial en los tiempos de procesamiento de la fase de calificación formal,

lo que confirma empíricamente que la automatización de tareas repetitivas y de verificación normativa podría liberar entre 3 y 7 días hábiles por cada expediente en su etapa inicial. El segundo hallazgo sustancial emerge de la percepción unánime de los entrevistados respecto a los factores que generan retrasos procesales, los cuales coinciden precisamente con las áreas donde la IA demostró mayor eficiencia, como es, la verificación de requisitos formales, la identificación temprana de documentación incompleta y la detección de vicios procesales. Los cuatro funcionarios judiciales consultados identificaron como principales cuellos de botella la alta carga, la presentación de escritos mal elaborados que no cumplen requisitos formales, y los sistemas manuales de revisión documento por documentos. Estos factores se correlacionan directamente con las capacidades demostradas por las herramientas de IA en el análisis matricial; en todas las plataformas detectaron en menos de 30 segundos las mismas deficiencias formales que un juez o secretario tardaría días en identificar, notificar y requerir su subsanación.

El tercer hallazgo revela tanto el potencial como las limitaciones éticas y prácticas de la implementación de IA en el sistema judicial ecuatoriano. Si bien el análisis matricial demostró que la IA puede procesar eficientemente la verificación formal de documentos, las entrevistas evidenciaron preocupaciones legítimas que deben incorporarse en cualquier propuesta de implementación. Estas preocupaciones son coherentes con las limitaciones observadas en el análisis matricial; ninguna plataforma de IA pudo realizar valoraciones de fondo sobre excepciones complejas, ponderación contextualizada de pruebas o interpretación situada de normas, confirmando que su rol debe

ser exclusivamente asistencial. Adicionalmente, los funcionarios reportaron que la elaboración de sentencias toma entre 5 días y 3 semanas según complejidad, y que los oficios de auxilio judicial a instituciones como el IESS o SRI, aunque se elaboran en 1-3 días, reciben respuestas en plazos de 1 a 3 meses, identificando un cuello de botella interinstitucional que la IA puede optimizar mediante seguimientos automatizados y notificaciones sistemáticas, pero que requiere coordinación más allá del sistema judicial interno. Estos hallazgos integrados sustentan la necesidad de un modelo híbrido donde la IA automatice tareas instrumentales y repetitivas, mientras que la decisión judicial, la valoración crítica y la supervisión ética permanezcan inalienablemente en manos de operadores humanos capacitados.

El uso de la Inteligencia Artificial en los procesos anteriormente mencionados, que han sido desarrollados dentro de un sistema procesal tradicional con una duración entre 4 y 5 meses para llegar a una sentencia judicial, demuestra mejoras significativas en los tiempos de procesamiento. Como se muestra en las matrices, tanto el tiempo de análisis de la demanda como el de la contestación no superan el minuto, lo que evidencia que el uso de la IA en el análisis de documentos legales agiliza las observaciones necesarias para las partes y permite una audiencia más pronta. Además, la IA analiza en profundidad tanto la forma como el fondo de las presentaciones, lo que genera mayor seguridad jurídica. El uso de la IA en los procesos judiciales, especialmente en el análisis de la documentación y las pruebas presentadas, realiza un examen exhaustivo para lograr el cumplimiento de las normas vigentes. Además, efectúa una crítica objetiva de la forma de presentación y formula las observaciones idóneas para solicitar complementos o

aclaraciones. Asimismo, proporciona un análisis diferenciado de cada documento para garantizar que estos se ajusten a los tiempos procesales y al debido proceso, evitando así la dilación de causas o el archivo inadecuado de documentos. Es evidente que el uso de la tecnología dentro del proceso judicial garantiza la celeridad respetando el debido proceso, como lo establece la ley. A su vez, examina la forma en que se presentan las pruebas, las cuales deben estar acordes a los derechos establecidos, logrando así la celeridad procesal y la economía procesal, ya que de manera automática la IA realiza las observaciones en el momento, dando tiempo a las partes para subsanar los errores de forma o de fondo cometidos, evitando así la acumulación de escritos. Esto refleja cómo la optimización de procesos mediante la gestión de IA genera celeridad, además de realizar los requerimientos necesarios al momento a otras instituciones con el objetivo de lograr un adecuado acceso a elementos probatorios, sin la necesidad de presentar de forma recurrente escritos o petitorios ante el juzgador. Además, al implementar la IA en la revisión de escritos judiciales, como se demuestra en las matrices anteriormente señaladas, herramientas como ChatGPT, Claude o DeepSeek pueden analizar demandas, contestaciones y vicios de formalidad en segundos, mientras que el capital humano se demora horas o días en realizar el mismo análisis. Esta automatización acelera las etapas preliminares mediante la calificación de demandas y contestaciones, verificando requisitos, detectando nulidades y produciendo la reducción de plazos, evitando así retrocesos por errores técnicos.

Conclusiones

Finalmente, la IA garantiza el cumplimiento de la celeridad y la economía procesal al reducir tiempos amplios de análisis de documentos, demandas y petitorios, así como las solicitudes

a instituciones, citaciones o notificaciones a las partes, logrando una descongestión de procesos. Esto permite que los jueces puedan obtener información precisa sobre puntos fundamentales, facilitando así una observación transparente de los documentos presentados y logrando resoluciones más prontas con menor gasto de recursos públicos y privados. Por otro lado, es necesario resaltar que al garantizar la celeridad no se debe sacrificar la calidad del debate jurídico ni el derecho a la defensa. La IA debe ser un apoyo eficiente para tareas repetitivas y filtros iniciales, pero no sustituye el criterio judicial, la ponderación de pruebas ni la interpretación contextualizada de normas. La esencia de las sentencias y resoluciones debe garantizar un análisis crítico del derecho, liberando tiempo para que jueces y abogados se enfoquen en lo sustancial, logrando argumentaciones sólidas y el acceso a la justicia del caso concreto. La tecnología bien aplicada acerca la justicia a la sociedad, pero la esencia del proceso sigue siendo humana.

El uso de una justicia digital permite realizar acciones concurrentes sobre documentos que deben ser analizados y verificados en el cumplimiento de sustancialidades formales. La IA es una herramienta indicada que permite este tipo de acciones en tiempos cortos y de forma simultánea, pero este instrumento no puede sacrificar el desarrollo de la sana crítica o la oralidad del sistema, ya que únicamente se transformaría en un sistema digital donde la argumentación es automática y no garantiza un criterio idóneo sobre las realidades humanas. Esta tecnología debe lograr disminuir en el mayor tiempo posible los trámites burocráticos, siendo necesario que la administración, jueces y abogados continúen desarrollando jurisprudencia que se adapte a las necesidades actuales que se desarrollan en la sociedad, logrando así un acceso a la justicia de forma

equitativa y eliminando brechas que impidan un desarrollo social más justo.

Referencias Bibliográficas

- Barona, V. (2022). Algoritmización del derecho y de la justicia: De la inteligencia artificial a la smart justice.
- Calés, R. (2019). Ciberjusticia: Tecnologías e internet para el acceso a la justicia. Obtenido de https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/16_DUASO_La%20constitucion%20en%20la%20sociedad%20y%20economia%20digitales.pdf
- Chapi, M. (2024). La sobrecarga procesal en la unidad judicial del Cantón Tulcán, Ecuador.
- Colmenarejo, A. (2022). Impugnación de las decisiones judiciales dictadas con auxilio de inteligencia artificial. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8559372>
- Daudí, V. (2022). De la justicia a la ciberjusticia. Obtenido de https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/218181/1/De%20la%20justicia%20a%20la%20ciberjusticia_INT%20def.pdf
- Diz, F. (2021). Modelos de aplicación de inteligencia artificial en justicia. Obtenido de <https://producciocientifica.uv.es/documento/s/6620102662f14c04d83934cc>
- Escámez, J. (2021). Ciberjusticia: Un acercamiento a su estudio como buena práctica en la labor judicial. Obtenido de <https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25464w/Ciberjusticia%20un%20acercamiento%20a%20su%20estudio.pdf>
- Estevez, E., & Fillottran, P. (2020). PROMETEA: Transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial.
- García, E. (2023). Justicia, inteligencia artificial y derecho de defensa.
- Gómez, J. (2022). Derechos fundamentales y proceso de inteligencia artificial: Una reflexión. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8559365>

- Manje, C. (2021). Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa: Guía didáctica.
- Ortiz, D. (2019). La vulneración de los principios de celeridad y economía procesal dentro de los procesos administrativos. Obtenido de <https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/f012f9f6-d329-4f06-9e3b-53570119db79>
- Paz, M. (2023). Principios de economía procesal y celeridad por la inaplicabilidad de la conciliación en el delito de estafa. Obtenido de <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15760>
- Salazar, L. (2020). Investigación cualitativa: Una respuesta a las investigaciones sociales. Obtenido de
- Sanchez, J. (2025). La inteligencia artificial y la ciberjusticia en Ecuador. Obtenido de <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/METANOIA/article/view/4023>

- Sancho, M. (2002). Garantías procesales en el uso jurisdiccional de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Obtenido de <https://raco.cat/index.php/IDP/article/view/n39-deluis>
- Vistín, A., & Jasmin, K. (2020). Principio de celeridad y economía procesal dentro del procedimiento monitorio en el Ecuador. Obtenido de <https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/823bcd57-1f0f-41de-a121-af2711e14888>
- Zou, C. (2022). Logros y perspectivas de la inteligencia artificial en China. Obtenido de <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=120103>



Esta obra está bajo una licencia de **Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional**. Copyright © Marlon Daniel Guillin Oviedo, Hugo Marcelo Arévalo Hidalgo, Johanna Irene Escobar Jaray y Edward Fabricio Freire Gaibor.

